



E

Editorial

La tesis del ministro Poduje

Entre la verdad ministerial y la realidad de los damnificados hay una distancia que el diálogo podría acortar. Poduje eligió lo contrario.

Hay ministros que llegan con una hoja de ruta. Otros llegan con una tesis, y el problema es cuando la tesis importa más que la realidad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha demostrado con su manejo del caso El Olivar que pertenece a la segunda categoría: instaló la idea de que las 52 viviendas construidas por la constructora San Sebastián deben demolerse, y desde ahí ha empujado con una obstinación que ya no conversa con nadie.

El informe del IDIEM que esgrime como argumento es contundente en identificar fallas de diseño, materiales y normativa. Pero -y esto conviene leerlo despacio- el mismo documento incluye un apartado titulado "Factibilidad técnica de reforzamiento", donde concluye de manera explícita que las deficiencias detectadas pueden corregirse mediante refuerzo estructural. El ministro, en cambio, eligió la opción más drástica y la presentó como la única. Así, sin matices, sin segunda mirada, sin diálogo previo con las familias afectadas. Los vecinos, una vez más, se enteraron por televisión.

Pero lo verdaderamente inquietante no es la decisión técnica, discutible como cualquier otra. Es el estilo. Poduje, tal como en la campaña municipal pasada, vuelve a buscar fantasmas donde no los hay. Cuando los damnificados levantan la voz, cuando los medios publican sus reparos, cuando una concejala o un dirigente vecinal se atreve a pedir explicaciones, la respuesta del ministro es sugerir que están siendo "utilizados" por la empresa constructora. Como si la angustia de quienes han intentado quitarse la vida o amenazan con quemarse a lo bonzo tras dos años de espera fuera un libreto ajeno. Su equipo de prensa, por lo demás, debería preocuparse menos de blindar al jefe y más de entregar la información como corresponde. Gobernar no es tener la razón a gritos; es construir acuerdos con quienes piensan distinto, incluso cuando incomodan.

Hay 52 familias que lo perdieron todo en el megaincendio y que hoy enfrentan, por segunda vez, el derrumbe de un proyecto de vida. Merecen una autoridad que escuche antes de decretar, que explique antes de demoler, y que entienda que la credibilidad del Estado no se restaura con querellas ni con descalificaciones, sino con humildad técnica y política.

Justo lo que, por ahora, falta en esta cartera.